

RESUMEN PROYECTO

Participación de la Agricultura Familiar en las Compras Públicas Estatales: el Caso de las Organizaciones de Productores del Norte del País

Equipo Docente: Jorge Vaz Tourem; Valeria Ferreira; Víctor Viana; Gabriela Fajardo; Paula Barrero, Adriana Cauci., Joanna Núñez, Vanessa Brocos; Gabriela Ostuni

Introducción -

La investigación se ejecuta en el marco de la convocatoria de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de UDelaR a “Proyectos de Investigación e Innovación Orientados a la Inclusión Social edición 2021”.

A partir del interés del equipo interdisciplinario conformado por docentes de diferentes servicios de UdelaR del CENUR Noreste, se elaboró el proyecto que buscó abordar desde un enfoque que dé cuenta de la complejidad de los sistemas alimentarios sostenibles, los desafíos específicos para la inclusión socioeconómica de los agricultores familiares, en la política de compras públicas de alimentos.

De esta forma se integraron docentes con formación en:

- Nutrición: Depto. Nutrición Poblacional / Carrera Técnico Operador de Alimentos, CENUR Noreste
- Ciencias Sociales: Carrera Tecnicatura en Desarrollo Regional Sustentable, CENUR Noreste.
- Ingeniería: Carrera Ingeniería Forestal (FING), CENUR Noreste.

Con las contrapartes institucionales en:

MIDES (División Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Departamento de Ruralidad).

MGAP (Dirección General de Desarrollo Rural).

Integrando estudiantes de pasantía de la Tecnicatura en desarrollo Regional sustentable - CENUR Noreste

Contexto

La pandemia por la COVID-19, presentó múltiples desafíos para mitigar los efectos sociales y económicos y asegurar la continuidad de la contribución de la agricultura familiar (FAO, 2020). Fortalecer los canales comerciales y las compras estatales es una oportunidad para superar las barreras a la inclusión socioeconómica del sector de la Agricultura Familiar y la Pesca Artesanal, pero la insuficiente información respecto a la dinámica de abastecimiento a los servicios públicos y los mecanismos involucrados representa un problema para la política de compras de alimentos del Estado en Uruguay. El fortalecimiento de las redes de abastecimiento y distribución, la coordinación eficiente entre logística y distribución requeridas por los productores familiares podrían mejorarse accediendo a soluciones de las tecnologías de la información y comunicación.

Objetivo: Caracterizar la situación de los productores familiares del Norte del país en cuanto a su organización y la capacidad de abastecimiento al Sistema de Compras Públicas Estatales y diseñar e implementar un sistema de información para el abastecimiento a servicios de alimentación.

Metodología:

Abordaje mixto cuali-cauntitativo, la muestra estuvo representada por 33 productores familiares, 2 organizaciones habilitadas (OH) para el régimen de reserva de mercado ley 19292 y 37 servicios de alimentación vinculados al MIDES previo consentimiento informado. Se obtuvieron datos de fuentes secundarias, entrevistas semiestructuradas, formularios autoadministrados y entrevistas grupales. Se procesaron los datos estadísticos y cualitativos, con la participación de los involucrados en el proceso a través de instancias de devolución y validación de resultados intermedios.

Resultados:

La caracterización de productores, sus organizaciones y los servicios de alimentación permite comprender diferentes aspectos de la implementación de la política, sus potencialidades y desafíos. Esta se logra desde una construcción del objeto de estudio y diseño de investigación

interdisciplinaria.

Los productores provenían de Salto, Paysandú, Tacuarembó, Artigas, Rivera, Cerro Largo y Flores. Su forma de tenencia del predio es: 15 propietarios, 6 arrendatarios, 5 colonos, 4 ocupantes y el resto en procesos de regulación de sus tenencias. El 57,6% producía ≤ 5 has (19), 15,2% 5 a 10has y >10 has 18,2%. El 81,8 % de las familias contaban con 2 y 4 integrantes, el 64,3% de los integrantes tenía 18-64 años y 29,7% eran menores de 18 años. El 5,6% no presentaba instrucción y 29,9% primaria completa o incompleta. El 68,3% de los integrantes participaban en la actividad productiva, 57,7% de hombres y 42,2% de mujeres. El 71,8% de los productores participaba de toda la cadena productiva y el resto de gestión y logística. 26 se dedicaban a la horticultura (tomate, mostaza, morrón, chaucha, rabanito, zucchini, pepino), 8 a vegetales de “hoja”(acelga, rúcula, lechuga), 12 a vegetales de chacra (papa, boniato, zapallo, zanahoria, remolacha, zapallito, choclo, maní). La tercera parte de la producción recorría más de 11km. Casi las $\frac{3}{4}$ de los productores vendían $<20\%$ de su producción al Estado y solo 15,1% más del 50%. 7 de cada 10 productores contaba con conexión a internet y la misma proporción utilizaba el celular para su actividad productiva.

Los servicios de alimentación se ubicaron en Salto, Artigas, Paysandú y Rivera, el 59% atendía entre 21 a 100 usuarios, la tercera parte asistía a niños desde el nacimiento hasta los 12 años. El 32% ofrecía merienda, 35% almuerzo y otro tiempo de comida y el resto los cuatro tiempos. Las compras públicas impactan en los productores familiares en las necesidades de coordinación, la logística y los aspectos financieros, el desarrollo de planificación productiva, producción estacional y especializaciones locales en diferentes rubros. Las dificultades enfrentadas se vinculan con la estabilidad en la concreción de las ventas, comunicación, generación de stock productivo, existencia de centros de acopio y la preservación durante el traslado, disminución del tiempo pago y simplificación de los procesos administrativos.

Tomando como base estos resultados y los intercambios posteriores con los actores, se está elaborando el software con funcionalidades para los diferentes roles del proceso de implementación de la política (productores, servicios de alimentación, organismos públicos como la contraparte

INDA) . Con dos aportes centrados en la aplicación como instancia de comunicación y soporte a la gestión.

Conclusión: A partir de la caracterización y problematización por parte de los actores que participan del proceso de abastecimiento a servicios de alimentación en el marco de la política de promoción de las compras públicas de alimentos que establece la Ley 19 292, se logran identificar aspectos a fortalecer para su sustentabilidad. La mirada interdisciplinaria permite reconocer la interrelación de factores socioculturales, económicos, organizativos, en la gestión de la política alimentaria analizada. Traduciendo además los conocimientos generados en una aplicación de TICs que promueve mejoras del proceso en la comunicación y gestión.